

ANA LÓPEZ-CANCIO | Presidenta de la patronal de empresas de formación ANCCP

"Hay un ambiente de desconfianza que no permite que el sistema de formación funcione"

"Los gobiernos autonómicos recelan ahora de las empresas del sector, como si nos considerasen chiringuitos"

Oviedo, José Luis SALINAS
Ana López-Cancio Romo es la presidenta de la Asociación Nacional de Centros con Certificados de Profesionalidad (ANCCP), compañías dedicadas a dar formación a trabajadores y parados. La agrupación tiene su sede en Oviedo y está integrada en la patronal nacional CEOE. El sector está en el centro de la polémica por los casos de corrupción y otras irregularidades que han movido al Gobierno a reformar el sistema de formación, apartando de la gestión directa de los cursos a los agentes sociales.

-¿Qué van a suponer para las empresas los cambios que acaba de impulsar el Ejecutivo?

-No lo sabemos. Que salgan los agentes sociales de los planes de formación no es nada favorable. Si la Administración consideraba que el sistema estaba mal, es responsable de la situación porque formaba parte de él. Nosotros trabajamos en la formación para el empleo, somos los intermediarios del mercado de trabajo, llevamos a los trabajadores los cursos adecuados para su mejora profesional, para que encuentren un empleo o para que el día del mañana estén formados en las nuevas cualificaciones que están surgiendo. Y en todo esto es fundamental que los agentes sociales participen. Queremos impartir formación, pero no somos quienes para decidir en qué, eso lo tiene que decidir el mercado de trabajo.

-Pero la reforma está hecha según el Gobierno para acabar con las irregularidades y para que no se repitan casos como los de Andalucía...

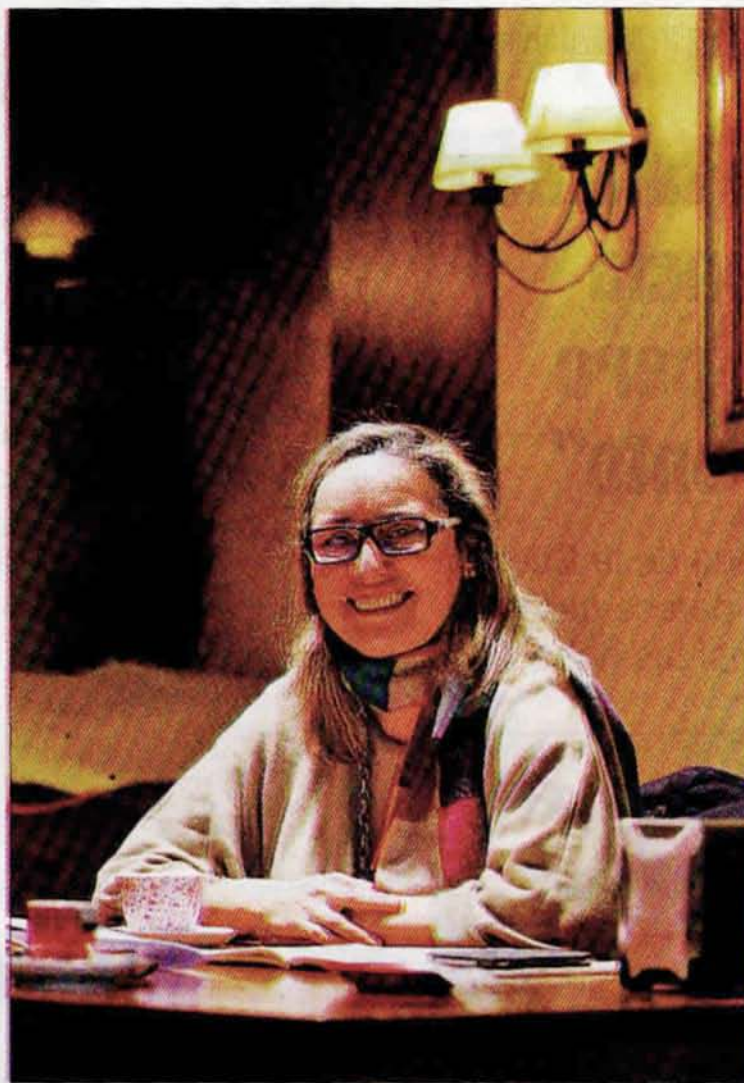
-Son las personas las que se corrompen, no es el sistema. Si no expulsas del sistema a las personas corruptas entonces da igual que hagas uno nuevo.

-Uno de los fines de la ley es abrir el campo para que las empresas formadoras compitan en mejores condiciones por la concesión de los cursos.

-Eso tampoco está claro. Hay una partida presupuestaria enorme que va destinada a las grandes empresas, lo que no nos parece ni bien ni mal. Esto era como la licitación para hacer una carretera: durante el proceso de la obra hay un seguimiento y se van haciendo los pagos. A nosotros nos controlan que tengamos las instalaciones adecuadas, que formemos bien a los alumnos, que haya una amplia inserción laboral...

-¿Y eso ahora va a cambiar?

-Ahora van a obligar a las empresas a justificar sus costes y niegan que se pueda concurrir con beneficios. Pero es que nosotros somos compañías que nos dedicamos a esto, ¿cómo no vamos a querer ganar dinero? Luego cada comunidad nos está poniendo sus trabas. Por ejemplo, aquí, en Asturias, si quiero hacer un curso privado tengo que presentar el listado de los alumnos treinta días antes para que me den la autorización. ¿Qué les digo a esos posibles estudiantes? Porque les estoy vendiendo un producto que no existe. Ahora nos quieren además imponer una inspección mayor. Nos inspeccionan al principio, durante y al final del curso. Tenemos que mantener las dotaciones físicas del centro y encima quieren que no ganemos dinero con la formación que llaman subvencionada.



Ana López-Cancio Romo. | LUISMA MURIAS

Perfil

Ana López-Cancio Romo. Nacida en Navarra, aunque hija de un avilesino y de una ovetense, es presidenta de la Asociación Nacional de Centros con Certificado Profesional (ANCCP). Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, le picó el gusanillo de la formación tras su paso por la fundación Forcem. Su asociación, con sede en Oviedo, está integrada dentro de la patronal CEOE e integrada por empresas que se dedican a la formación regulada, aquella destinada a los trabajadores. De la agrupación forman parte ahora 110 compañías.

-¿Acaso los sindicatos y patronal no les hacían competencia con sus cursos?

-A nosotros los agentes sociales nos han ayudado mucho. La asistencia técnica de CEOE ha sido fundamental. Son los que llevan mucho tiempo, más de 20 años, metidos el sistema y saben cómo funciona la financiación y tienen un gran conocimiento de

las necesidades del mercado laboral.

-¿Cuánto tiempo tienen para estudiar la nueva ley?

-Ya ha entrado en vigor. Se ha interrumpido cierta formación porque la gente no sabe cómo aplicarla, es de locos. No entendemos qué necesidad había de ponerlo en marcha tan rápido. Además, según se publica, este real decreto sale a la vez que una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se da la razón a Cataluña y le dice que no le pueden quitar las competencias para acreditar a los centros de formación. Se quería centralizar en el Servicio Público de Empleo estatal. Esto es un tema competencial entre administraciones y nosotros estamos en el medio.

-¿Y ahora mismo se está dando formación a los trabajadores?

-Estamos formando con las convocatorias anteriores, las nuevas están paradas. Y en muchas regiones hay unos problemas muy serios. Por ejemplo, en Andalucía no se acreditan nuevos cursos porque como está la juez Ayala investigando no se mueve nadie; en Valencia no se está pa-

La oferta formativa está parada porque no sabemos cómo se aplicará la nueva ley

gando. Cada comunidad va a lo suyo. Esto es inviable.

-¿Y por qué cree que ocurre de ese modo?

-Sospechamos que es que no se fían de nosotros, parece que nos consideran chiringuitos.

-¿Ese estigma se está trasladando al conjunto de las comunidades?

-A todas. Hay algunas más abiertas a entender nuestros problemas. En Valencia, por ejemplo, ha llegado hasta tal punto de control de los costes que se pide que se devuelva lo que ya se ha gastado porque no se acepta el gasto, por ejemplo, en fotocopias.

-¿Está motivado por los casos de corrupción de Andalucía?

-Probablemente. Pero los centros a lo que nos hemos dedicado siempre es a impartir formación. Parece que somos los culpables de todo lo que ha pasado cuando realmente somos las víctimas. Hay gente que lleva 30 años en esta profesión y ahora está pasando realmente mal.

-¿En Asturias está mejor la cosa?

-No es donde peor está. Desde el Servicio Público de Empleo están tratando de hacerlo bien.

-Hay empresas que se quejan de que pese al paro no encuentran trabajadores. Ocurre en el metal o los talleres de coches. ¿Por qué sucede esto?

-Los trabajadores que venían de la construcción que eran soldados con hacer un solo módulo podrían ir a trabajar, por ejemplo, a una plataforma petrolífera, donde hay una gran salida. Pero estos planes de formación tendrían que ser más ágiles. Se ha creado un ambiente de desconfianza permanente que no permite que esto avance.

-¿La crisis les ha beneficiado o todo lo contrario?

-Nos hubiera beneficiado mucho si este sistema fuera más ágil de lo que es, porque éste es el momento en el que las personas que han perdido su empleo necesitan formarse en algo nuevo para volver a trabajar.